

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA PRESIDENCIA DE AL SISI EN EGIPTO: SEGURIDAD, REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y REFORMAS

Paloma González del Miño

Departamento de Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid

http://dx.doi.org/10.5209/rev_NOMA.2013.v40.n4.48343

Resumen:

Los tres años de transición política en Egipto, evidencian un proceso dificultoso y muy abierto, con un balance cuestionable en el plano político y una profunda crisis económica. La victoria de Al Sisi, una vez anulada la otra fuerza política más potente desde las rebeliones de enero de 2011, es decir, los Hermanos Musulmanes, pone de manifiesto la apuesta por la seguridad, la reactivación económica y las reformas, los tres principales ejes del débil programa electoral del presidente de la nación.

Esta “transición guiada” por el ejército, no oculta los desafíos a los que se enfrenta el país. En esta lógica, la actuación de Al Sisi, pasa por concentrar los esfuerzos en la política nacional cuyos sustantivos retos pueden dilapidar su presidencia, postergando la permanente aspiración egipcia de ser considerado como el líder natural del mundo árabe.

Abstract:

The three years of the political transition in Egypt show a difficult and very open scenario with a questionable balance on the political level and a deep economic crisis. The victory of Al-Sisi, after clearing the other most powerful political force since the rebellions of January 2011, that is the Muslim Brotherhood, proves the commitment to security, economic recovery and reform, the three principal axes of the weak electoral program of the president.

This “guided transition” by military forces cannot hide the challenges faced by the country. In this logic, the actions of Al-Sisi are focused in national politics whose substantive challenges can squander his presidency, delaying the permanent Egyptian aspiration of being regarded as the natural leader of the Arab world.

1. Introducción

La victoria de Abdel Fatah Al Sisi en las elecciones a la presidencia de Egipto en mayo de 2014 es un punto de inflexión en un proceso que comenzó casi un año antes, con el golpe militar de julio de 2013, que deponía al primer presidente de la nación (Mohamed Mursi) democráticamente electo. Igualmente, con su proclamación como presidente de la nación, se abre paso a una segunda fase de dificultosa transición que aleja las esperanzas de libertad y democracia como emblema de las rebeliones acontecidas desde el 25 de enero de 2011 (Claret: 2011). Después de tres años de transición, son numerosos los retos principales a los que ha de hacer frente el nuevo presidente, siendo los más determinantes la seguridad, la reactivación económica y las reformas, para reflotar el colapso del sistema heredado.

Al Sisi, no cuenta con un partido político que ejerza de correa de transmisión de propuestas; ni un programa sólido de actuación más allá de la constante proclama en cuanto a la necesidad de pacificación del país; ni tampoco con el unánime respaldo de la sociedad egipcia, sino más bien todo lo contrario, es decir, una sociedad polarizada que ha visto como la principal fuerza política post-rebelión 25 de enero de 2011 (los Hermanos Musulmanes) ha sido declarada ilegal. Su margen de maniobra se reduce significativamente en un país donde la pobreza sigue en aumento y afecta al 20% de la población (según CIA World Factbook, enero de 2014). Con un crecimiento del 5,1% del PIB en 2010, se ha pasado a 1,8% en el año 2014, evidenciando la acentuación de la pobreza y el desempleo, que ronda el 20%, dos de los detonantes de los alzamientos populares, a los que hay que añadir en el plano económico la falta de oportunidades para muchos de los 85 millones de habitantes de Egipto, en el que el 60% de la población tiene menos de 30 años (Teti; Gervasio.: 2011).

Una vez anulado el principal grupo de oposición, es decir, los Hermanos Musulmanes, Al Sisi cuenta con el apoyo de casi todos los organismos estatales, principalmente con el politizado poder judicial y el potente ministerio del interior, junto a un gigantesco aparato burocrático y unos medios de comunicación dóciles al poder presidencial. A este cuadro, se suma una diluida oposición de fuerzas políticas y, paradójicamente, con el partido salafista Al Nour, de carácter islamista radical aunque cuente con capacidad política casi nula. El nuevo régimen, también cuenta con el apoyo de Arabia Saudí y las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico, temerosas de una posible dinámica revolucionaria que pudiera contagiar a determinados sectores de la sociedad civil en la implementación de mayores derechos y libertades. En contra, hay que agregar la escasa experiencia política de Al Sisi gestada en la época del anterior presidente Morsi y un cuestionable y débil programa electoral, sin concretar demasiado en las propuestas, que prima la seguridad y en menor medida el relanzamiento económico (Haass: 2011).

La transición política en Egipto ha derivado en un proceso muy dificultoso, con un balance cuestionable en el plano político y una profunda crisis económica, que no verifican los objetivos de amplios sectores de la población cuando salieron a las calles y plazas del país demandando cambios sustanciales, que se resumen en el lema “pan, libertad y justicia social” (Vidal, Bourekba: 2013). Egipto ha experimentado un proceso complejo con concluyentes giros políticos y errores colectivos, modelando un cuadro sociopolítico y económico inquietante, en donde el antiguo Jefe de las Fuerzas Armadas, Abdelfatah al Sisi, se presenta como la “solución”, después de tres años de aguda crisis política y económica, que ha debilitado a la excelsa población, que a modo de plebiscito en las elecciones presidenciales de mayo de 2014, ha optado por una “transición guiada” por el actor más potente del sistema: el ejército.

El enfoque de “juego de suma cero” que viene caracterizando la transición egipcia cuestiona tanto los avances en el proceso democrático como la capacidad de rescate de la economía. El recurso a las urnas se ha convertido en una coartada que ni garantiza, ni legitima el proceso, aunque se hayan producido siete convocatorias desde la caída de Hosni Mubarak, no convirtiendo al país en más

democrático y cohesionado (Ottaway; Hamzawy: 2011), sino más bien lo contrario, una polarización política difícil de resolver, en virtud de la falta de consenso entre los distintos actores políticos para elaborar un proyecto nacional inclusivo, que no altere los repetidos cambios en las reglas de juego, siendo el ejemplo más palmario el golpe militar de julio de 2013 que acaba con la presidencia de Morsi y que evidencia la resistencia a perder centralidad y poder por parte del ejército, como la institución llave que tutela el proceso de transición.

La finalidad de este artículo es analizar el proceso de transición en Egipto junto a los retos que afronta el país, para evaluar las dinámicas de cambio-continuidad, en una etapa de readaptaciones del poder. En esta lógica, se parte de dos premisas: (A) el proceso de transición se viene caracterizando por la primacía de lo político frente a lo económico; (B) el ejército es verdadero diseñador de la transición, que en una primera fase permite que gobiernen los Hermanos Musulmanes, a la vez que evita su desgaste político, pero cuando ve amenazado su statu quo, opta por volver a la casilla cero, demostrando que quieren gobernar, no en la sombra.

2. Un juego de reposición “de suma cero”

Los dos actores más importantes del escenario político egipcio, el ejército y los Hermanos Musulmanes, mediante sus actuaciones, vienen mostrando su débil compromiso con la democracia (Achcar: 2011). Los primeros mantienen una fórmula de control amparados en el freno a la deriva islamista, favorecidos por el boicot de los intactos aparatos de la dictadura de Mubarak que bloquean el engranaje institucional y por el agravamiento de la economía. Los Hermanos Musulmanes, que llevaban 84 años sin tocar poder estatal, cometen errores mediante una pésima gestión y un proyecto no inclusivo, que demuestran su voluntad para no aceptar los hechos consumados, alegando la legitimidad de las urnas.

Después de la caída de Mubarak, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) presidido por el Mariscal de Campo Mohammed el-Tantawi que ejerce la presidencia de la República en funciones, se erige como la primera cabeza visible del proceso de transición tras el vacío de poder. Trazando una hoja de ruta que engloba cuatro elecciones, comenzando por la convocatoria de un referéndum constitucional (19 de marzo de 2011), el proceso continúa con la celebración de elecciones parlamentarias a la Cámara Alta y Baja y la elección de una comisión compuesta por cien miembros del nuevo parlamento, encargada de elaborar una nueva Carta Magna de 2012, aprobada por referéndum y suspendida un año después (Samaan: 2012). En último lugar, la celebración de elecciones para la presidencia de la nación en 2013, da la victoria Mohammed Morsi, primer presidente electo democráticamente en la historia de la república.

La duda sobre el proyecto democratizador para Egipto por parte del CSFA se verifica con el devenir de los hechos, dado que se convierte en el gestor solitario durante la transición y hasta las elecciones presidenciales. Este período se caracteriza por, al menos, tres actuaciones principales que confirman una transición custodiada por los militares: la disolución de la Asamblea del Pueblo en aplicación del veredicto del Tribunal Constitucional, declarando ilegal la ley

electoral por la cual habían obtenido los Hermanos Musulmanes y los salafistas la mayoría de los escaños del parlamento. En segundo lugar, la trascendente decisión judicial, cargada de nódulos políticos, sentenciando a Mubarak a cadena perpetua, siendo condenado solo “por no impedir el uso de la fuerza letal contra manifestantes desarmados”, saliendo incólume de las acusaciones de corrupción como de los casi “treinta años de oscuridad” a los que se refiere la sentencia. En tercer lugar, la denominada ley de “aislamiento político” que no permite presentarse a las elecciones a la presidencia de la nación a las figuras relevantes que ostentaron cargos durante el régimen de Mubarak o en el disuelto Partido Nacional Democrático (PND), sin embargo su inaplicación con el general Shafik hace cuestionar su finalidad, crea una problemática jurídica y es un auténtico varapalo al proceso de transición (Lampridi-Kemou: 2011).

A las primeras elecciones parlamentarias libres en los últimos 30 años de vida política egipcia concurren más de medio centenar de partidos, que se pueden agrupar en cuatro tendencias políticas e ideológicas: dos son de tendencia islamista, el Partido de la Justicia y Libertad (brazo político de los Hermanos Musulmanes -que dominaba el grupo Alianza Democrática por Egipto)- y los salafistas, con una ideología islamista más radical y conservadora; las otras dos coaliciones seculares forman el Bloque Egipto -cuyo mayor exponente es el partido Egiptios Libres- y la Alianza Revolución Continúa -encabezada por el Partido Socialista Egipto-. El principal problema de estas alianzas es que algunas son antinaturales. Sin embargo, la importancia real de este parlamento fue designar la comisión que redactó la Constitución de 2012.

La victoria de los partidos islamistas en el parlamento denominado Asamblea del Pueblo, supone casi tres cuartas partes del hemicycle, es decir, el Partido Libertad y Justicia consigue el 45% de los escaños y los ultraconservadores salafistas de Al Nour obtienen el 25% de los escaños. En principio, el CSFA seguirá nombrando al presidente del gobierno, aunque los Hermanos Musulmanes representen la legitimidad parlamentaria, desarrollando un peligroso juego entre los militares y los Hermanos Musulmanes. Esta Asamblea del Pueblo post-Mubarak, quedó disuelta por el CSFA (junio de 2012) a instancias del Tribunal Supremo, alegando vicios de procedimiento y una presunta ilegalidad en el modo de escrutinio, lo que se interpreta por los sectores islamistas como un golpe de Estado suave o una *contrarrevolución* auspiciada por los militares con el concurso de un poder judicial aún dominado por el antiguo régimen.

Según la ley electoral objeto de impugnación, dos tercios de los diputados han de ser elegidos por un sistema de listas de partidos, frente al tercio restante para candidatos individuales. Sin embargo, el acuerdo entre los militares y las fuerzas políticas enmienda la norma, permitiendo que los candidatos individuales puedan ser al mismo tiempo afiliados de los partidos políticos. La inesperada sentencia del Tribunal Supremo anula este acuerdo al mermar las opciones de los ciudadanos independientes (Samaan: 2012). ¿Cómo ha de entenderse la existencia de una junta militar en la jefatura del estado y con un parlamento disuelto? La legitimidad obtenida por el movimiento islamista (Hermanos Musulmanes y salafistas) mediante las urnas, queda diluida en pro de otros actores políticos.

El segundo proceso electoral decisivo de la convulsa transición egipcia son las elecciones a la presidencia de la nación en el 2012. A estos comicios concurren

13 candidatos, pasando a la segunda vuelta dos, un ex general (Ahmed Safik) y el candidato de los hermanos Musulmanes (Mohammed Morsi), en un escenario polarizado y con la duda de cómo va a ser el grado de ruptura-continuidad en las estructuras del antiguo régimen y, sobre todo, qué espacio de maniobra va a dejar el CSFA cuando tenga que entregar el poder. La segunda vuelta electoral a la presidencia de la nación, refleja el dualismo del régimen desde 1952: islamistas *versus* militares, que se salda con escasa diferencia, poco más de 260.000 votos a favor de Morsi. Las estrategias electorales de ambos contrincantes compartían como nexo común el desprestigio del adversario y la falta de visibilidad del proyecto político, pudiendo sintetizar la campaña de Shafik en un discurso centrado en convertir las elecciones en un referéndum sobre los Hermanos Musulmanes y el rol del islam político, frente al candidato de la hermandad musulmana, Morsi, que plantea las elecciones en clave de plebiscito sobre la rebelión de enero de 2011.

Diversas consideraciones se extraen de la lectura de los resultados electorales. En primer lugar, la severa división en la sociedad egipcia, que podría “justificar” la continuidad del CSFA para interferir en el proceso político, bajo el pretexto de proteger a las instituciones del Estado y garantizar que todo el espectro social quede representado. En este contexto, se inscribe la declaración constitucional, emitida por el CSFA (18 de junio de 2012), que otorga a sí mismo poderes legislativos hasta que el nuevo parlamento sea elegido. En segundo lugar, se verifica el retorno de los *felul* del Partido Nacional Democrático (PND) y del antiguo régimen a la escena política, después de la derrota en las elecciones parlamentarias, donde obtuvieron menos del 3% de los escaños. Las redes del régimen de Mubarak, que incluye - pero no se limita- a los restos de PND, lograron movilizar a parte del electorado en favor de Ahmed Shafik, obteniendo el 23,66% y el 48,3% respectivamente en la primera y segunda vuelta. Ahora bien, el resultado no se explica solo por las redes clientelares del antiguo régimen, sino también por la fatiga revolucionaria y el deseo a la estabilidad de amplios sectores de la población. En tercer lugar, los Hermanos Musulmanes han perdido parte de su popularidad, que se traduce en disminución de votos frente a las legislativas, como manifiestan los resultados obtenidos por Mohammed Morsi, que en la primera vuelta alcanza el 24,7% y en la segunda el 51,7%, a pesar de la unión de todas las fuerzas islamistas que lo respaldan. Por último, cabe reseñar el alto grado de abstención y la falta de organización y estrategia de las otras fuerzas de oposición, sin capacidad para aglutinarse en un candidato único (Korany: 2012).

3. El derrocamiento de Morsi como estrategia preventiva de la tutela militar

Doce meses y tres días dura el mandato del gobierno islamista de Mohammed Morsi, con un balance errático, asentado en la incapacidad de generar consenso, en un deslizamiento hacia la islamización del estado y en la autocracia presidencialista del poder. Este primer presidente civil en la historia de la República, tildado de falta de liderazgo y no siendo el candidato natural de los Hermanos Musulmanes (descartado Jairat Al Shater por cuestiones penales), realiza una gestión política muy cuestionada y con una preocupante crisis económica. En esta tesitura, los militares intervienen dando un ultimátum como solución impuesta: el derrocamiento de Morsi y el traspaso de los poderes presidenciales al presidente del Tribunal Constitucional (Adli Mansur), con

carácter interino hasta la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales anticipadas.

¿Se puede considerar la destitución de Morsi como la clásica contrarrevolución disfrazada de golpe militar? o ¿el golpe militar impide la completa toma del poder por parte de los Hermanos Musulmanes evitando el colapso económico y la caída hacia una radicalización islamista? Lo ocurrido en Egipto ha sido un golpe de estado, cuyo resultado es la salida al escenario de los militares como diseñadores y gestores de la incierta transición, con un discurso asentado en la seguridad nacional y en la recomposición de la economía. A diferencia de 2011, cuando la población se congregó contra Mubarak, ahora la mayoría de los movimientos sociales apoyan el golpe. Desde un punto de vista politológico, no es posible minimizar el derrocamiento por los militares de un gobierno democráticamente electo, pese a los errores cometidos. Resulta efectivo preguntarse que oculta la destitución, si fue necesaria o había formas mejores de reconducir una transición marcada por la profunda polarización, además de la incapacidad del gobierno islamista para generar consensos en el plano político y económico. Los militares crearon un nicho de oportunidad con la situación del país y la movilización ciudadana -que recoge casi 22 millones de firmas a través del movimiento Tamarod que pedía la dimisión de Morsi-. Este contexto, les permite relanzar su estrategia, mediante la cobertura de defender la seguridad y el bienestar nacional (Ben Néfissa: 2013).

Son palmarios los retos que debía afrontar el nuevo presidente de la república en los planos político y económico, a lo que se añade la inexperiencia del ejercicio del poder tanto del presidente como de su grupo político, en un contexto de resistencia por parte de la burocracia hostil acostumbrada a identificar al islam político como el adversario a combatir. Morsi, prometió dos cosas “ser el presidente de todos los egipcios” y no imponer una agenda islamista, pero en el gobierno de la nación abandona la generación de consensos y las promesas electorales, evolucionado hacia la “hermanización del Estado” (El-Din, 2012) o dicho en otros términos, la capacidad de penetración de los Hermanos Musulmanes para copar las instituciones y controlar los resortes del poder con medidas muy cuestionadas por su ortodoxia a las que se resiste ese “estado profundo”.

La transición en Egipto exigía la suma de fuerzas que conciliaran a islamistas y seculares, apaciguando las tensiones existentes. Pero el proyecto escogido es la vuelta a la naturaleza autocrática de gobierno islamista, mediante la confusión entre hegemonía y mayoría, cuya tendencia acusada es monopolizar el poder, abandonando la tesis del consenso para legitimar el proceso. El decreto presidencial restableciendo el disuelto parlamento es una muestra de tomar las riendas del proceso de transición unilateralmente y cortar las ataduras con las que asumió el cargo de presidente de la nación. En esta misma línea, se inscribe la decisión de cesar a la cúpula militar y restaurar los poderes presidenciales restringidos por la enmienda constitucional, lo que elimina de facto la bicefalia en su seno. Sin embargo, el desacierto más cuestionado es la Declaración Constitucional, que adopta la fisonomía de decreto presidencial defensivo (22 de noviembre de 2012), por el que se establece que las declaraciones constitucionales, las leyes y las resoluciones adoptadas por el presidente de la nación, desde la fecha de su elección hasta la entrada en vigor de la Constitución y la elección del nuevo parlamento, son definitivas e inapelables ante cualquier

órgano. Este decreto, supone la concentración de poderes absolutos por parte del presidente asegurando la inmunidad de sus decisiones necesarias para la “defensa de la revolución”.

Este cuadro de actuaciones se completa con “la confusión generada entre la presidencia del país, el partido político y el movimiento político-religioso. Debido a la propia naturaleza autocrática de la Hermandad, una organización enormemente jerarquizada, con unas prácticas habituales de falta de disenso, de recompensa de la fidelidad y de obediencia y una sobreexplotación del discurso religioso e ideológico, se reforzó la impresión de falta de transparencia y de progresivo sectarismo del poder. En vez de insistir en las políticas y las reformas sociales más importantes -como la del sector seguridad o la económica que está al borde del colapso-, el gobierno islamista se centró en lo ideológico, que profundizaba aún más en la brecha social y política existente” (Vidal, Bourekba, 2013: 7). También, los salafistas mostraban su descontento por la monopolización del poder y la oposición buscaba presentar una agenda negativa y de desaprobación tendente a que el gobierno fracasara, a lo que se suma un cúmulo de hechos consumados como situar figuras afines en puestos clave de la administración y las instituciones, la permanente corrupción, o el tinte ideológico de la Constitución de 2012.

Se pueden agrupar en cuatro categorías principales las debilidades de la presidencia de Morsi: A- concentración del poder a través del Partido de la Libertad y la Justicia y de su matriz los Hermanos Musulmanes, sembrando la desconfianza que muchos sectores tenían en el movimiento islamista; B- una agenda islamista, en la que el presidente de la nación, apoyado por su grupo y por las fuerzas salafistas más radicales, respaldados en un discurso religioso, impusieron un proyecto excluyente que dejaba fuera a parte de la sociedad; C- agudización de la situación económica que recae en las clases medias y menos favorecidas, a pesar de contar con cuantiosas donaciones de países del Golfo Pérsico; D- deficiente situación de las libertades públicas que revivían actuaciones negras del mandato de Mubarak, incrementando la presión contra los sectores críticos, las organizaciones civiles, las centrales sindicales y la prensa no afín.

Amplios sectores de población mostraban rechazo al proyecto de Morsi, además de la dividida y disímil oposición que tampoco tenía una estrategia común, salvo, como elemento aglutinador, el rechazo a las políticas implementadas y el temor a que el país se deslice hacia el fundamentalismo islámico. En este contexto, los militares capitalizaron la situación política y social que se traducía en usuales manifestaciones masivas contra Morsi, agudizadas en los meses anteriores al golpe de estado, y en la recogida de millones de firmas pidiendo la dimisión del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones.

4. El golpe de Estado.

El ejército termina destituyendo al presidente Morsi con un discurso que tiene un eje central, “satisfacer las demandas del pueblo egipcio” (El-khawwas, 2012). Las señales implícitas de colisión creciente entre los dos actores más potentes del sistema egipcio, estaban patentes desde que el gobierno islamista atravesó líneas rojas para consolidar su posición. Tanto el presidente como el gobierno y el grupo islamista que los respalda no entendieron que los militares no se plantean desacoplarse del poder, sino guiar una transición pactada, que se quiebra cuando

se vulneran determinadas líneas ajenas a la hoja de ruta. Además, cuando se acentúa la deriva islamista y se agrava la crisis económica, muchos de los grupos sociales que habían participado en las rebeliones y los sectores laicos se inclinan por la “solución militar”. El resultado es el golpe de estado (3 de julio de 2013), que da paso al inicio de una segunda transición en Egipto, con el derrocamiento de Morsi.

Como primeras medidas, Al-Sisi, el “hombre fuerte” del país, anuncia la suspensión temporal de la Constitución de 2012 (Haider: 2013), el nombramiento de Adly Mansour como presidente interino, la creación un comité para la revisión y redacción de una nueva constitución, la reconciliación nacional y elecciones presidenciales, como ejes centrales de un calendario indefinido para lo que discursivamente se denomina “la normalización política del país. Este golpe de estado, inserta a Egipto en una escenografía tan original como arriesgada, en la que dos expresidentes de la República se encuentran encarcelados y procesados (Mubarak y Morsi) y se inicia una segunda transición política sin haber concluido la primera, con un presidente y un jefe de gobierno interinos que enclaustran una agenda política indeterminada de contenido, salvo la reforma de la Constitución y el anuncio de elecciones presidenciales y legislativas.

El primer presidente civil de la República ha sido elegido en las urnas y derrotado en las calles. La primera conclusión que se extrae, es la falta de homogeneidad, entre el bloque que respalda el golpe de estado. Los partidarios de Morsi apelan a su legitimidad democrática, frente a los detractores que elaboran un discurso acentuando la falta de calidad de la actuación gubernamental, la deriva islamista y la seguridad nacional. La segunda conclusión, que deja patente este golpe de estado, es una hoja de ruta muy diluida, arrojando importantes sombras sobre el rumbo democrático de esta transición. Sin embargo, para “legitimar” el golpe, los militares necesitaban el voto popular, siendo el referéndum de la nueva Constitución (13 y 14 de enero de 2014) el instrumento adecuado que cumplía una doble finalidad pues servía para rebajar el tinte islamista de la anterior Carta Magna y evaluaba el grado de aceptación del mismo, adquiriendo tintes de plebiscito (Daranas Peláez: 2012).

5. La segunda transición: los militares como gestores directos

En Egipto, la relación entre el poder político y el ejército ha sido estrecha, siendo todos los presidentes de la nación militares hasta Morsi. La omisión del poder militar para preservar a Mubarak, demuestra que esta institución estaba dispuesta a provocar el cambio, en la medida que les permitiera custodiar el control y diluir el descontento (Dawisha, 2013). El ejército no ha querido renunciar a su protagonismo y encontró un nicho de oportunidad en la rebelión popular de 2011, a la que apoyaron. No tanto por apostar por la democratización, que podría perjudicar sus intereses, sino porque ya no resultaba práctico perpetuar la alianza con Mubarak, un autócrata en fase decreciente tanto física como políticamente por la descomposición encubierta de su régimen. Así mismo, se podía resolver el imprescindible cambio generacional en la institución militar, para posteriormente conducir con mayores garantías de control el proceso político.

La transición egipcia se subdivide en dos fases. En la primera, los militares prefirieron mantenerse en la sombra aunque sin abandonar el control, porque era más rentable no verse erosionados por el desgaste político en un escenario

político y económico complejo. Los militares hicieron lo posible para evitar el triunfo del movimiento islamista en los procesos electorales (elecciones parlamentarias y a la presidencia de la nación), o al menos minimizar su supremacía, pero no impidieron que los islamistas, mediante un pacto, asumieran la gobernabilidad del país. Además, el respeto a la decisión popular mediante las urnas no permitía que los islamistas esgrimieran el rol de victimizados como había ocurrido en distintas fases desde la instauración de la República en 1952 (Awad, 2004). En la segunda fase, se quiebra el pacto, al traspasar Morsi y los Hermanos Musulmanes líneas rojas.

Para el sector militar, el presidente islamista no significaba desarticularse del poder político, sino mutar su fisonomía, aunque conservando el control. Morsi, debería abordar los graves problemas económicos y mantener la disociación entre política y religión. Sin embargo, se desvía al intentar disgregarse del poder militar y al abordar cuestiones ideológicas para hegemonizar y blindar su poder mediante la deriva islamista y medidas políticas respaldadas en decretos muy cuestionables (Ben Néfissa, 2013). Los militares habían considerado este escenario desde el inicio del proceso de transición, por lo que se podría afirmar que el período que va desde junio de 2012 a julio de 2013, lo consideran una especie de ensayo de gobernanza.

6. Las elecciones presidencial de 2014. El inicio de la segunda transición

Tras la aprobación del Referéndum Constitucional de 2014, el presidente interino, Adly Mansour anuncia (26 de enero 2014) un hecho incongruente que las elecciones presidenciales se celebrarán antes de las parlamentarias, en un parlamento que llevaba años disuelto. La nueva Constitución aprobada en 2014, regula el mandato presidencial a 4 años y solo a dos mandatos. El presidente tiene prohibido afiliarse a ningún partido político. Puede tomar juramento ante el Tribunal Constitucional, en ausencia de un parlamento elegido. También, quedan reguladas las funciones del presidente en cuanto a ser el encargado de implementar las políticas públicas del Estado (El-ghobashy: 2013).

La victoria de Al-Sisi era esperada después del soporte recibido por la institución militar, los principales medios de comunicación y la élite económica, que se unieron para apoyar al ex jefe de ejército como una candidatura patriótica. Las elecciones presidenciales en Egipto celebradas en mayo de 2014 cuentan con dos candidatos, el ex Ministro de Defensa y “hombre fuerte” Abdel Fatah al-Sisi, frente al activista sindical Hamdeen Sabahi. Las cifras oficiales mostraron una participación del 47,5% (25.578.233 votos), lo que se traduce en una baja participación, con la victoria aplastante de Al-Sisi, que recauda un porcentaje del 96,91% de votos (23.780.000 votos), lo que significa diez millones más de votos que el ex presidente Mohamed Morsi (quien obtuvo, 13 millones de votos en las elecciones de 2012).

No hay que descontar, que es el séptimo proceso electoral en tres años desde la caída de Mubarak, lo que se traduce en un estado de hartazgo generalizado, desconfianza y escepticismo en amplios sectores de la población. El gobierno justificó medidas especiales con el propósito de animar a los egipcios en participar en el sufragio. Sin embargo, el proceso electoral pone en evidencia

que la popularidad del Al-Sisi no es tan “universal” como sostienen sus partidarios y seguidores. El Comité Electoral aprobó la participación de observadores electorales de 80 países y 6 organizaciones internacionales de la sociedad civil para supervisar las elecciones, aunque la validez del proceso electoral ha quedado cuestionada por los observadores internacionales, especialmente después de la decisión de la Comisión Electoral de ampliar las elecciones un día más, lo que fue percibido por los opositores de Al-Sisi como un intento de aumentar el índice de participación para dotar a su victoria de credibilidad. En este sentido, estas medidas especiales, plantea dudas sobre la independencia de la comisión electoral, la imparcialidad del gobierno y la integridad del proceso electoral.

Al-Sisi recibió apoyo de diversos movimientos y partidos políticos heterogéneos como Tamarod, Partido Democrático Árabe nasserista, el frente Misr Balady, el Frente Moderado, Neo-Wafd, el Partido Liberal Egipcio o el Partido Tagammu. La mayoría de estos partidos políticos celebraron una serie de conferencias de apoyo a la candidatura de Al-Sisi, junto con otras figuras destacadas de la sociedad civil. En contra de la candidatura de Al Sisi, están distintos movimientos de jóvenes revolucionarios que crearon una alianza contra el golpe de estado, encabezada por el Movimiento 6 de Abril, argumentando sus dudas sobre el compromiso de Al-Sisi con la democracia y la responsabilidad directa e indirecta con las violaciones de derechos humanos cometidas durante el período del gobierno interino. En esta misma línea argumental, estos movimientos sociales exigen “elecciones creíbles, transparentes y justas”, frente a la conversión de las elecciones en un referéndum que significaría el retorno al totalitarismo por el líder de la contrarrevolución.

7. Principales retos de la nueva transición egipcia

- *Economía*

El reto económico será vital para el proceso político. Con una población total de 93 millones de personas, de las cuales 8 millones residen en el extranjero, el país, durante décadas, ha sufrido falta del desarrollo económico. Según el Banco Mundial (2012), el PIB anual de Egipto supera los 262 mil millones de dólares, lo que significa un ranking medio en la región. Si la comparativa se realiza con otro país vecino, aunque no árabe, Israel, los datos son significativos, pues aunque tiene una cifra parecida, es decir, 257 mil millones de dólares de PIB en 2012, su población es 8 millones de personas.

PIB de Egipto			
2010	2011	2012	2013
218.887.812.550	236.000.735.704	262.831.912.587	271.972.822.883

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2013), Disponible en <http://datos.bancomundial.org/pais/egipto-republica-arabe-de>

El PIB está limitado por una tasa de crecimiento lenta (entre el 2%- 2,5%) en los últimos cuatro años. La inestabilidad y la agitación desde las rebeliones de 25 de enero de 2011 hieren a diversos sectores económicos como el turismo y la industria, que se ha visto golpeada por una ola de huelgas obreras y parones debido a la inseguridad interna del país (Abdih, Y; 2011). El lento crecimiento económico, 1,2% en el año 2013 (datos del Ministerio de Planificación de Egipto 2014), queda paliado en cierta medida por la ayuda externa de otros países de la región -Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait-, que apoyaron el golpe de estado de 2013. El ya presidente del país, Al- Sisi, en un discurso televisado sobre la situación económica y las medidas a implementar por el gobierno (julio 2014) declaró que los tres países del Golfo pueden haber proporcionado más de 20 mil millones de dólares en ayuda desde julio de 2013.

Egipto es un país con gran potencial económico, pero tiene que hacer grandes reformas en su estructura productiva. La intención del gobierno es reenergizar el sector económico, golpeado todavía más, desde la caída de Morsi. El presupuesto anual de Egipto es aproximadamente 100 mil millones de dólares, aunque sufre la carga de tres partidas de gasto fijo (deuda, subvenciones a alimentos y energía, además del salario de los empleados públicos que son más de 6 millones). Cada una de estas partidas absorbe al rededor del 20%-25% del presupuesto nacional, suponiendo en conjunto cerca 75% del presupuesto, rebajando posibilidades a otras partidas de gasto como servicios básicos o proyectos de inversión. Estas medidas de disminución de gasto se toman después que el Ministerio de Finanzas señala (junio de 2014) el colapso de la economía con una inflación del 10%, la disminución de la tasa de crecimiento en un 2% y el paro juvenil rondando el 25%, a lo que hay que añadir la carga para el tesoro público de los salarios y los subsidios.

El siguiente paso del gobierno se centra en buscar el apoyo de los ciudadanos ante la crisis económica, en ganar confianza en la economía egipcia para atraer inversiones y en anunciar un ambiguo plan de protección para las personas con bajos ingresos sin perfilar cuáles serán las políticas al respecto, en donde los ingresos del 50% de los egipcios se destinan al consumo diario a falta de una red de seguridad social que los proteja. En esta lógica de búsqueda de recursos, se ha creado un fondo para recaudar donaciones para el Estado. Las donaciones e inversiones de voluntarios, alegando una cuestión patriótica mediante la necesidad de fondos propios para salvar del abismo la economía de Egipto, son la punta de lanza de esta peculiar batalla financiera iniciada por el presidente del país. Sin embargo, la economía moderna no solo depende de la popularidad y el orgullo nacional, sino que es necesario implementar las herramientas financieras.

Para amortiguar la crisis económica, tanto el presidente de la nación como el nuevo gobierno, vienen elaborando un discurso asentado en la austeridad del gasto público con el objetivo de reducir el 10% el déficit público, aunque a costa de la eliminación parcial de los subsidios y el aumento progresivo de cargas impositivas. La clave está en crecer y crear empleo, pues según estimaciones del Banco Mundial se necesitan 9,5 millones de puestos de trabajo hasta el 2020, por lo que resulta imprescindible que el nuevo liderazgo político impulse infraestructuras que generen empleo, en una economía como la egipcia que se basa en tres pilares sensibles: los ingresos del Canal de Suez, las remesas y el

turismo, combinados con el apoyo internacional. Las autoridades han recurrido al sector privado para implementar ambiciosos proyectos en infraestructuras que pretenden ser el nuevo símbolo del país (construcción de viviendas, AVE Alejandría-Luxor, el nuevo plan del Canal de Suez, el metro, nuevos puestos, plantas eólicas, solares y de aguas residuales, centrales eléctricas y refinerías).

En suma, el desempleo, la falta de vivienda, las infraestructuras inadecuadas, junto a la mala distribución de la riqueza que verifica una amplia brecha social, se identifican como principales déficit en este terreno. El desafío es conseguir la transformación interna y no tener que estar apuntalados por ayuda financiera externa, pues no es solución a largo plazo. Egipto posee componentes para consolidar su economía como potencia regional, si atendemos a los recursos con los que cuenta, las personas, el dinamismo, la ubicación y los vínculos globales y regionales, por lo que actualmente el país se encuentra en el plano económico abierto a experiencias económicas en diversos escenarios.

- **Seguridad**

La seguridad, tanto en el plano interno como en el regional se ha convertido en otro reto a solventar. Los graves problemas derivados en Oriente Medio por la prolongación del conflicto en Siria (Alhassen, M: 2014), junto al Estado fallido en el que se ha convertido Libia, más la desarticulación parcial de Irak y la creación del nuevo Estado Islámico se han convertido en posibles desestabilizadores regionales. El nuevo régimen egipcio ha establecido una "guerra contra el terrorismo" en su territorio, comenzando por la Hermandad Musulmana, el grupo político religioso más poderoso y organizado del país, al ser catalogado como grupo "terrorista". También se han realizado operaciones militares en el Sinaí contra los "grupos armados de yihadistas", como Ansar Bayt Al-Maqdis o Agnád Misr (soldados de Egipto).

La integración de los grupos de oposición políticos y religiosos en un nuevo sistema se presenta como otra medida para apaciguar el país y centrar la atención en la lucha contra los sectores fundamentalistas terroristas. Además, desde el inicio de las revueltas del 25 de enero de 2011, muchos grupos pro revolución vienen demandando reformas en los servicios de policía y en los servicios de seguridad acusados de abusos contra los derechos humanos. Igualmente, emprender un proceso inclusivo de justicia para abordar los abusos en cuanto a derechos humanos cometidos durante varias décadas de autoritarismo y en los tres años de transición egipcia, contribuiría a limar las profundas divisiones socio políticas de este período y acrecentar la confianza de la población en el nuevo régimen.

8. Conclusiones

Egipto se encuentra sumido en una complicada prueba de efectividad, para mostrar las posibilidades de éxito de la transición, en un país que se percibe como paradigma significativo en la región en cuanto a viabilidad de cambio de un sistema autoritario a democrático. A tres años de este proceso, el panorama político y económico sigue siendo frágil, excesivamente dilatado y trufado de

sombras, sin poder descontar el peso del pasado político. El tránsito a una gobernanza que garantice el desarrollo económico, social e institucional sostenible, promoviendo un sistema equilibrado entre Estado, sociedad civil, sigue siendo un desafío. Igualmente, es necesario la implementación de una política inclusiva entre los actores políticos, especialmente los Hermanos Musulmanes, que gozan de amplio arraigo social, así como la promoción de la cultura política que durante décadas se ha visto cercenada.

El país se enfrenta a otros retos sustanciales: como recuperar la estabilidad perdida, recobrar la senda del crecimiento y desarrollar una economía colapsada, pues se corre el riesgo de promocionar un discurso maniqueo en el que prime la seguridad para recuperar la estabilidad sociopolítica y se diluya el crecimiento económico. El mayor ejemplo de alteraciones en la agenda política es la falta de consenso para elaborar un proyecto inclusivo entre los distintos actores políticos y sociales, junto a la resistencia a perder centralidad por uno de los actores políticos tradicionales, el ejército para no licuar sus poderes y cuantiosos intereses económicos y políticos.

La acumulación de errores ha ido minando el proceso de transición. En parte son atribuibles a las políticas de los Hermanos Musulmanes que no han administrado eficazmente la victoria, sino que han propiciado una capitalización partidista y excluyente, sin abrirse a otros sectores políticos y sociales. La interpretación de las mayorías como respaldo absolutista, que permitía llevar a cabo su programa de gobierno e imponer un modelo de sociedad, se refleja en la Constitución de 2012 y en la “hermanización” del poder y las instituciones políticas. La oposición laica todavía, carece de visión, tiempo, unidad y experiencia organizativa conjunta para ensanchar la aparente bipolarización que demuestra la política egipcia entre islamistas y militares, aunque cuenta a su favor con la pérdida del miedo, el creciente y perseverante activismo social de los ciudadanos egipcios y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Al Sisi, y el principal sector que le respalda, es decir, los militares, salvo en cuestiones económicas, no han presentado una agenda definida, o mejor dicho, sin visualizarse por completo, aunque se aleja de readaptar un sistema pluralista que genere incentivos democratizadores y opta por pilotar una “transición ordenada”, mediante la estrategia de cambio limitado y controlado desde arriba. En esta lógica, los militares, encabezados por Al Sisi, han definido un nebuloso rumbo político: consolidación de su papel en el escenario nacional y erradicación del otro actor poderoso egipcio, los Hermanos Musulmanes, identificados como organización terrorista una argucia ad hoc para eliminarlos políticamente.

Bibliografía

- ABDHIH, Y., (2011): "Cubrir el déficit de empleos". *Finanzas y Desarrollo*, Vol. 48, nº2, Washington DC.
- ABDULBAKI, L., (2008): "Democracy and the re- consolidation of authoritarian rule in Egypt". *Contemporary Arab Affairs*, vol. 1, nº 3, Beirut.
- ACHCAR, G., (2011): "The Muslim Brothers in Egypt's orderly transition". *Le Monde Diplomatique*, Valencia.
- AL-DIN ARAFAT, A., (2009): *The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt*. Palgrave Macmillan, New York.
- ALHASSEN, M., (2014): "Siria y Egipto, la barrera del miedo ha caído". *El poder de las redes sociales*. La Vanguardia Dossier, nº 50, Barcelona.
- ALTEERMAN, J. B., (2012): *Egypt in Transition: Insights and Options for US Policy*. Centre for Strategic and International Studies, Washington DC.
- AWAD, H., (2004): *In Pursuit of Legitimacy: The Muslim Brothers and Mubarak, 1982–2000*. I.B. Tauris, London.
- BEININ, J.; ABBAS, K.; WHITSON, S.; DUNNE, M., (2010): *Labour Protest Politics and Workers Rights in Egypt*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.
- BEN NÉFISSA, S., (2013): "The Egyptian Transition Arena: Between the Army Leadership, the Muslim Brotherhood and a Society in Full Transformation". *Anuario IEMed del Mediterráneo*, Barcelona.
- BINDER, L., (1998): *The Cambridge History of Egypt. Modern Egypt from 1517 to the end of the twentieth century*. Cambridge University Press, Cambridge.
- CASA ÁRABE., (2012): *Atalaya Política*. Casa Árabe, nº 18, Madrid.
- CASTELLS, M., (2012): *Redes de indignación y esperanza*. Alianza Editorial, Madrid.
- CLARET, A., (2011): *Cuatro notas en torno a la revolución egipcia de 2011*. Real Instituto Elcano, Madrid.
- COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (2011): *The New Arab Revolt*. Council on Foreign Relations, New York.
- DARANAS PELÁEZ, M., (2012): "Proceso constituyente en Egipto. Perspectivas jurídicas". *Revista General de Derecho Público Comparado*, nº 11. Madrid.
- DAWISHA, A., (2013): *The Second Arab Awakening*. Norton, New York.
- DUBAI SCHOOL OF GOVERNMENT, (2011): "Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter". *Arab Social Media Report*, vol. 1, nº 2, Dubai.
- DUBAI SCHOOL OF GOVERNMENT, (2012): "Twitter in the Arab Region". *Arab Social Media Report*, Dubai.
- EL-DIN, G., (2012): "Consolidating power". *Al-Ahram Weekly*, El Cairo.
- EL-GHOBASHY, M., (2013): "The Praxis of the Egyptian Revolution". McMURRAY, D; UFHEIL-SOMERS, A., (editors): *The Arab Revolts: Dispatches on Militant Democracy in the Middle East*. Indiana University Press, Bloomington.

- EL-KHAWAS, M., (2012): "Egypt's Unfinished Revolution". *Mediterranean Quarterly*, nº 23, Washington DC.
- HAASS, R. N., (2011): "Reflections on the Revolution in Egypt." *The New Arab Revolt*. Council on Foreign Relations, New York.
- HAIDER-QUERCIA, U., (2013): "La Constitución egipcia de 2012: líneas de desarrollo y perspectivas". *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, nº. 19. Enero-Junio, Madrid.
- HINNEBUSCH, R., (2003): *The international politics of the Middle East*. Manchester University Press, Manchester.
- HIRSCHKIN, C., (2011): *From the blogosphere to the Street: The Role of Social Media in the Egyptian Uprising*. Jadaliyya, Washington DC.
- IZQUIERDO BRICHS, F., (Ed.) (2009): *Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo*. Fundación CIDOB, Barcelona.
- KEMOU, A; AZAOLA, B., (2009): "El Egipto contemporáneo". IZQUIERDO BRICH, F: *Poder y regímenes en el mundo árabe contemporáneo*. Fundación CIDOB, Barcelona.
- KHAMIS, S. y VAUGHN, K., (2011): "Cyberactivism in the Egyptian Revolution: How Civic Engagement and Citizen Journalism Tilted the Balance". *Arab Media and Society*, nº14. KIMENYI, M. S. (2011): *The Arab Democracy Paradox*. The Brookings Institution, Washington, DC.
- KORANY, B., (et al.) (2012): *The Arab Spring in Egypt*. American University in Cairo Press, El Cairo.
- LAMPRIIDI-KEMOU, A., (2011): "Egipto la revolución inconclusa". GUTIERREZ DE TERÁN, I.; ALVAREZ OSSORIO, I.: *Informe sobre las revueltas árabes*. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid.
- ONU., (2012): *Human Development Data for the Arab States – Egypt*. Disponible en <http://www.arab-hdr.org/data/profiles/EGY.aspx>.
- OTTAWAY, M; HAMZAWY A. (2011): *Protest Movements and Political Change in the Arab World*. Carnegie Endowment, Washington DC.
- SAMAAN, M., (2012): "Vox Pop: Egyptians Prepare to Choose a President". *Foreign Policy*, Washington, DC.
- TETI, A.; GERVASIO, G., (2011): "La segunda revuelta de enero en Egipto: causas y consecuencias de una supuesta revolución". *Anuario IEMed del Mediterráneo*, Barcelona.
- VIDAL, L., BOUREKBA, M. (2013): "Cartografía sociopolítica tras el despertar árabe: en busca del equilibrio de fuerzas". IEMed. *Anuario del Mediterráneo*, Barcelona.